



ECUADOR

Cuando la crisis se hace cotidiana

Augusto BARRERA GUARDERAS

El ciclo de inestabilidad política y de deterioro económico en que está enfrascado el Ecuador en los últimos tres años, parece contradecir la tendencia de normalización democrática por la que América Latina ha transitado en las últimas décadas. Este texto se propone realizar un acercamiento a los hechos ocurridos en Ecuador entre el 21 y 22 de enero de 2000, en el marco de un análisis del proceso político de aplicación de las reformas neoliberales en el país. Por lo mismo, antes que un análisis exhaustivo del evento, se privilegia una visión panorámica de la trama de conflictos de la sociedad ecuatoriana y de los actores que los activan y despliegan.

Los hechos

El 5 de febrero de 1997 una gran movilización social desencadenó la caída del ex presidente Bucaram. A menos de tres años de aquel episodio,

el 21 de enero del año en curso, Jamil Mahuad, uno de los artífices de la caída del «bucaramato», debió correr suerte parecida: salió camuflado por la cochera del Palacio de Carondelet una vez que las Fuerzas Armadas le invitaban a «abando-

***A partir de 1982,
Ecuador se habitúa
a ciclos de crisis
y ajustes económicos.***

nar el cargo» (1). Pocas horas antes una multitud de indígenas y campesinos apoyados por oficiales jóvenes del ejército habían ocupado el Palacio Legislativo y la Corte Suprema de Justicia. Conocido el «abandono del cargo» de Mahuad, marcharon a Carondelet a consagrar la instalación de una Junta de Salvación Nacional cuya composición fue negociada con la cúpula militar.

Después de tres horas, el Comandante General de las Fuerzas Armadas y miembro de la recién instaurada Junta, se retractó de su participación, dejando sin piso el fugaz gobierno que no alcanzó a nombrar ni su propio secretario. El Alto Mando Militar retomó el control de la situación y posesionó en la madrugada del 22 de enero a Gustavo Noboa (vicepresidente de la fórmula de Mahuad) como Presidente Constitucional de la República en las instalaciones del Ministerio de Defensa.

Los indígenas y campesinos, entre indignados por la «traición» y agotados

(1) La descripción de los hechos se apoya en notas de prensa de los periódicos: *El Comercio*, *Hoy* y *El Universo*, en la revista *Vistazo*, así como el reciente trabajo de Kintto Lucas (2000). La semántica de los derechos es un verdadero campo de disputa interpretativa: «Sublevación, rebelión o levantamiento indígena militar»; «golpe de Estado»; «sucesión constitucional» y hasta «sucesión semi-constitucional» (en tanto Mahuad jamás renunció formalmente al cargo).

por una extenuante jornada, que llevaba ya una semana, emprendieron el «retorno» de Quito a sus comunidades rurales. Prometieron volver. Algunos de los oficiales que protagonizaron la asonada fueron tomados prisioneros en los días siguientes, mientras que, una vez controlada la situación, el Congreso Nacional «ratificó» la constitucionalidad del nuevo presidente en medio de grandilocuentes discursos a favor de la democracia.

Las cámaras de empresarios que habían guardado un prudente silencio público durante los acontecimientos, calificaron aquella noche de una pesadilla. Con evidentes expresiones de complacencia y alivio, respaldaron a Noboa, condenaron a Mahuad y a los «golpistas» y exigieron, desde el arranque de la nueva administración, apretar el programa de reformas y «mantener la democracia».

Pasados dos meses del nuevo Gobierno, se prepara una nueva oleada de protestas. La inflación alcanza el 35% en los tres primeros meses de 2000, y las estimaciones oficiales pronostican que al final del año bordeará el 45% (¡en dólares!) (2). La mayoría parlamentaria con la que el nuevo Gobierno ha podido pasar el nuevo paquete legal es exactamente la misma que apoyó y sostuvo al Gobierno de Mahuad.

El mes de julio se presenta desde ya, como un nuevo momento de tensiones. Un paquete de alzas de servicios y tarifas está anunciado para entonces. La sensación en el país es que nuevamente «algo pasará...».

(2) La estimación la hizo el Gerente del Banco Central del Ecuador, bajo el supuesto de que la economía esté totalmente dolarizada a fines de año. Declaraciones aparecidas en la revista *Gestión*, marzo 2000.

La trama y los actores del conflicto

Los años setenta se caracterizaron en Ecuador por un intento desarrollista de industrialización sustitutiva (ISI) de la mano de dictaduras militares. Los ochenta, con el retorno a la democracia (1979), se abren con un breve periodo que vincula los últimos estertores de una estrategia de desarrollo nacional con una tibia modernización de las instituciones políticas que habría de durar poco. A partir de 1982, con la crisis de la deuda externa, el país se habituaba a una lógica de crisis-ajuste que recuerda la imagen de una banda sinfín. Este camino largo y tortuoso de puesta en escena del neoliberalismo ha estado plagado de marchas y contramarchas que no han logrado configurar una «racionalidad de mercado».

Las evaluaciones del desempeño de los procesos de reforma institucional y económica colocan a Ecuador en el grupo más bajo, titulado como de reformas incompletas o parciales, o de países reformadores lentos (3). Es ciertamente muy poco lo que —aun en los parámetros del imaginario neoliberal— puede mostrarse como saldo «a favor» de estos veinte años. La particularidad que aquí se sugiere para el caso ecuatoriano no desconoce el carácter complejo, conflictivo y multiterminado de los procesos de reforma en los países de América Latina, pero advierte que, a diferencia de la mayor parte de ellos, en Ecuador no hay un punto razonablemente conclusivo en el que operen nuevas formas de acumulación, se establezca el régimen político

(3) Ver Eduardo Lora, (1998) y Sebastián Edwards, *Crisis y reforma en América Latina*, Emecé Buenos Aires, 1997, citado en CORDES (1999).

Ecuador forma parte del grupo de países de reforma institucional y económica incompleta.

y decurran modalidades de gestión institucional inscritas en un paradigma neoliberal.

En lo que sigue se formulan algunas ideas para explicar el caos institucional al que ha llegado el país; se apela, para ello, a una mirada que va más allá del plano de los rendimientos y las destrezas gubernamentales y que, más bien, hace relación a tres factores vinculados a la «matriz de poder social» (4): a) el tipo de conformación de las clases dominantes y su relación con el Estado; b) el papel arbitral de las Fuerzas Armadas, y c) la existencia de un activo y beligerante movimiento social.

La lógica rentista y el Estado patrimonialista

Las condiciones sobre las que se intentaron aplicar las políticas neoliberales en Ecuador distan mucho de las de una economía moderna e industrial, que supuestamente debió haber emergido del modelo de desarrollismo anterior. La estructura productiva ecuatoriana está altamente segmentada, con un sector moderno débil y dependiente del mercado externo y de múltiples formas de subvención esta-

(4) Se utiliza el concepto de Claus Offe, *Contradicciones del Estado de bienestar*, Alianza, México, 1990.

***El sector productivo
moderno está segmentado
y depende de múltiples
formas de subvención.***

tal. La lógica de acumulación se ha caracterizado por un fuerte sentido «rentista», es decir de consecución de ganancia sin incrementos de productividad y de usufructo de los recursos estatales para su reproducción. La fatal especialización primario agroexportadora, conduce además a una situación de permanente vulnerabilidad de la economía (5).

Durante los sesenta y setenta, los grupos de poder que amasaron sus fortunas en el modelo primario exportador (en la hacienda, en la agroexportación y en la banca), diversificaron sus intereses a la manufactura y servicios y lograron imponer mecanismos de transferencia del ingreso petrolero (vía créditos preferenciales, protección arancelaria, control de la divisa, endeudamiento interno y externo). Bajo la nueva modalidad de liberalización y globalización, los esfuerzos principales no han estado orientados al incremento de la productividad, la eficiencia y la competencia, sino al reforzamiento de condiciones de producción monopólicas y oligopólicas, la transferencia de activos estatales a manos privadas y la aplicación de nuevos subsidios

(5) Los ingresos de las exportaciones del Ecuador han sido afectados dramáticamente por el deterioro de los términos de intercambio desde 1982. Pese a la expansión de su volumen, su poder adquisitivo se mantiene bajo (Larrea, 1997).

(6), que han concluido en la implementación de una modalidad de «reprimarización modernizada» (Acosta, 1997).

En suma, pese al discurso anti estatal de los empresarios, el control del Estado ha sido y es un factor determinante en la lógica de la acumulación. La lucha política por el control de un Estado prebendalista ha hecho imposible la aspiración de autonomizar las esferas política y económica, como si se tratase de conjuntos institucionales «guiados por sus propias lógicas y ceñidos a sus respectivas reglas de conducta» (CORDES, 1999).

Los más grandes grupos económicos han impulsado discursivamente el proceso de reformas pro mercado, pero no han logrado constituir su propia unidad alrededor de este proyecto. Sus fracturas regionales, sus proveniencias y articulaciones internacionales distintas, su marcado carácter oligárquico, su forma de relación patrimonial con el Estado, han colocado en primer plano, a lo largo de estas dos décadas, sus disputas corporativas. No hay traspié en las reformas legales o en los procesos de privatización abortados que no tengan detrás encarnizadas disputas interburguesas. Parece claro que en Ecuador no ocurre ese proceso simultáneo de «desestructuración» del antiguo patrón de desarrollo y sus correspondientes actores y de «estructuración, gestación y afianzamiento de nuevos polos dinámicos en torno de los que

(6) El Estado ecuatoriano asumió durante los años 1983, 1984 y 1987 la deuda externa incurrida por agentes económicos privados. La «sucretización», así como el actual proceso de salvataje bancario son dos factores decisivos en el descalabro actual de la economía.

se organiza la inserción parcial de los países al sistema económico global» (7). El libre mercado en la práctica del neoliberalismo local juega como un dispositivo discursivo para recomponer lógicas monopólicas u oligopólicas privadas.

Sometido a esta disputa, el Estado no ha podido constituir una institucionalidad por encima de los intereses particulares y de los antagonismos sociales, que ordene las relaciones de los agentes económicos y la distribución de la riqueza social. La constante ha sido la des-institucionalización y la discontinuidad de las políticas de los sucesivos gobiernos, explicable desde las contingencias y los intereses de los grupos que captaron el control del Estado. Aquello que en la sociología ecuatoriana contemporánea ha sido tratado como bloqueo institucional es, en cierto modo, un subproducto de los fenómenos descritos.

Inscritos en esa (ir)racionalidad económica, buena parte de los partidos políticos dejan de ser mediadores entre el Estado y la sociedad, constructores de ciudadanía —o cualquier definición habitual en la ciencia política—; adoptan más bien el rol de «formas empresariales» en las cuales perviven los sentidos oligárquicos y en no pocas ocasiones cuasi mafiosos de agrupación de intereses corporativos. La corrupción —en el sentido más amplio— se convierte en un atributo asociado al patrimonialismo, con lo que el círculo de la perversión del sistema político queda cerrado. El ejemplo de Mahuad es paradigmático:

(7) La idea corresponde a Álvaro Díaz, citado por J.C. Torre, (1998).

***El Estado no constituye
un sistema de instituciones
por encima de los intereses
económicos particulares.***

un candidato financiado por banqueros —en una campaña insolentemente millonaria— que, una vez llegado al poder como presidente, congela el 70% del monto de los depósitos de los ahorristas para salvar «el sistema financiero».

A todo ello habría que sumar el deterioro espeluznante de las condiciones de vida de la población. Un informe del Banco Mundial (1999) que evalúa el impacto de la crisis entre 1995 y 1999, revela que el número de indigentes aumentó en 12 puntos porcentuales en ese periodo, situándose en el 49%; la participación del quintil más pobre en el total del consumo decreció del 5,3% en 1995 al 4,3% en 1999; la desocupación casi se duplicó, llegando al 17%. La canasta básica estimada a marzo de este año es de 200 dólares, mientras el salario mínimo no llega a 60 dólares mensuales. Cifras de organismos oficiales hablan de que el 70% de la población ecuatoriana está debajo de la línea de pobreza.

Es obvio que habría de esperar como resultado una profunda crisis de legitimidad. El Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, la Función Judicial y los partidos políticos tienen, de modo sostenido en la última década, niveles de confianza y aceptación sumamente bajos. Los datos disponibles muestran que no sólo existe un patrón cíclico propio

***Los ciudadanos
tienen muy poca confianza
en las instituciones
y partidos políticos.***

de las dinámicas de desgaste de los gobiernos, sino que hay evidencias de una insatisfacción profunda y creciente frente a todas las instituciones (8).

El papel de las Fuerzas Armadas

Presionadas por el conflicto con Perú, verdadero trauma nacional desde los años cuarenta, las Fuerzas Armadas desarrollaron su propia doctrina de defensa y seguridad nacional. Si de partida hay recelos con los civiles y afanes tutelares, la constatación de semejante cuadro de las élites políticas y económicas fue asumida por la institución militar como un dato clave para asegurar su autonomía institucional.

Nociones como las de «poder nacional», «desarrollo», «soberanía y unidad nacional» han configurado un núcleo duro en el imaginario militar. La idea básica es que un país pequeño y pobre como Ecuador debe compensar sus limitaciones impulsando el desarrollo, evitando la radicalización y el desbordamiento de sus conflictos y preser-

(8) El Congreso Nacional tiene apenas el 8% de aceptación ciudadana antes y después de los acontecimientos de 21 de enero. La confianza en la justicia y el sistema policial es otro de los puntos críticos y a la vez más explicables: hay 21 banqueros procesados y, a excepción de uno, prófugos por violar leyes del sistema financiero. *El Comercio*, 8 de abril de 2000.

vando una relativa paz social. Desde esa ideología, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han asumido un papel arbitral en el sentido más amplio y cotidiano del término, es decir, no sólo en los momentos álgidos de las crisis —tal como el caso de las caídas de Mahuad o de Bucaram—, sino en buena parte de los conflictos sociales diarios de los últimos años (9).

La firma de los Tratados de paz con el Perú efectuada a fines de 1998, el énfasis anti estatista de las políticas económicas (que atacan la participación de las Fuerzas Armadas en la actividad productiva), la escasez presupuestaria que impacta en los programas cívico militares y en el mismo funcionamiento operativo, y la actual problemática de las autonomías puesta en escena por la oligarquía guayaquileña (10), son elementos que configuran un exigente escenario de redefinición de las misiones militares y tensan su unidad doctrinaria. A ello se suman las exigencias de la geopolítica regional, que adquiere una dinámica inusitada con la activa estrategia norteamericana expresada en el *Plan Colombia*. De hecho, en ese guión, Ecuador y su ejército cumplen un papel

(9) Casi no hay problemas que no hayan pasado de algún modo por «manos militares» en algún momento de su tratamiento o resolución: desde la cuestión indígena hasta la reubicación de los comerciantes minoristas en las zonas céntricas de Guayaquil.

(10) La crisis bancaria adquirió rasgos regionalistas en la medida en que la mayor parte de los bancos quebrados tenían asiento en la ciudad de Guayaquil. Ello ha activado la demanda de los sectores empresariales, ampliamente apoyada por la población de las provincias costeñas, de modificar el modelo de Estado unitario y optar por un autonómico. Los alcances de las propuestas autonomistas bordean en algunos casos una cuasi independencia del Estado central.

importante que se hace evidente ya con la instalación de la base militar de Manta (11).

La condensación de estos factores internos y externos no deja de ser traumática en las Fuerzas Armadas. Hay preguntas que han rondado sistemáticamente las intervenciones de los coroneles insurrectos y que son planteadas a modo de legitimación de su acción: ¿Qué sentido tiene el Estado nacional una vez que él mismo abandona responsabilidades como la política monetaria con la dolarización? ¿Qué significan unidad y desarrollo nacional en épocas de globalización? ¿Tiene sentido «sostener» una democracia corrupta, a costa de emplear la institución militar en la represión de un movimiento de protesta con amplio respaldo social? ¿Cabe involucrarse en el conflicto colombiano a costa de extender una situación de violencia fratricida? Aún está por hacer un trabajo más riguroso de investigación de la génesis y desarrollo del movimiento de insurrectos, pero parece bastante claro que, al menos, la estructura de oportunidades para la sublevación se presenta de cuerpo entero.

La presencia de un movimiento social beligerante

Para quienes han seguido de cerca los conflictos sociales ecuatorianos no es ninguna novedad el protagonismo y la

(11) Desde finales de 1999 a petición de la administración Clinton y con la ausencia del Gobierno de Mahuad, está instalada, en la costera ciudad de Manta, una base militar norteamericana de apoyo logístico al trabajo de inteligencia aérea en contra del narcotráfico colombiano. Datos de prensa indican la presencia de unos 200 efectivos militares norteamericanos.

El movimiento indígena y campesino ha sido protagonista de los conflictos sociales.

fuerza movilizadora y expresiva del movimiento indígena y campesino, y de la coalición que se ha logrado constituir en torno a él. Ya en 1990, el país vio con asombro como varios cientos de miles de indígenas paralizaron las vías y las principales ciudades del país en demanda de solución para más de un centenar de conflictos de tierras. De entonces acá, en medio de los conflictos de las élites, el deterioro dramático de las condiciones de vida de la población y la pérdida de legitimidad del sistema político, el movimiento indígena ha transitado por una dinámica de universalización de sus demandas, de aprendizaje de repertorios, de creación de nuevos marcos para su acción, de fortalecimiento de sus estructuras de movilización y de impulso a una alianza social (12).

A lo largo de la década, la lógica general del movimiento indígena, así como de otros actores sociales, fue combinar la acción en la «arena institucional» con la movilización y pre-

(12) El núcleo duro de la alianza social lo constituyen la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), la CONFUNASSC (Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino), la CMS (Coordinadora de Movimientos Sociales), que reúne a sindicalistas públicos y grupos urbanos. En ciertos momentos se han sumado los transportistas, los pequeños comerciantes, el magisterio y aun algunos empresarios pequeños y medianos quebrados por sus deudas o por el congelamiento de sus cuentas.

***La rebelión de enero
puso sobre el tapete
el tipo de democracia
y el modelo económico.***

sión social. Por ello su participación en los hechos del 21 de enero fue vista por algunos analistas como un extravío del guión y eventualmente como una hipoteca del capital político y social logrado. La apuesta por «el golpismo» en una alianza militar debilitaría, según este argumento, las credenciales democráticas del movimiento. Quizás estas observaciones sean ciertas en un contexto de transición y afianzamiento de la democracia, o desde una perspectiva normativa que aspira a construir democracia desde la sociedad civil. Pero no parece que estas razones sean contundentes para los dirigentes indígenas, por el momento. Aunque efectivamente el levantamiento indio y campesino de enero activa y aviva el inveterado racismo de un segmento de la sociedad, cuenta a la vez con un apoyo muy amplio; expresiones como «los indios han sacado la cara por todos», repetidas una y otra vez durante estas semanas, demuestran que el punto de referencia de la acción indígena-campesina fue ponerse a tono con el amplísimo deseo de derrocar a Mahuad (13).

(13) En las encuestas publicadas por los medios de comunicación, el 92% de los ecuatorianos estaba por la salida de Mahuad. Cuando se escribe este texto (abril de 2000), el 69% de la población no está de acuerdo con los juicios a los indígenas y el 66% está a favor de otorgar la amnistía a los coroneles insurrectos, (*Hoy*, 13 de abril de 2000).

La crisis permanece instalada

A pesar de las lecturas endémicamente «optimistas» que reivindican para el campo popular la caída de Mahuad —tal como lo hicieron con Bucaram—, aquí intentamos concluir que en los hechos y su desenlace convergieron varios factores, de los cuales el retiro del apoyo de las clases dominantes y el papel arbitral de las Fuerzas Armadas fueron decisivos para el derrocamiento y la salida «semi-constitucional» de la crisis. Los grupos de poder sacrificaron a Mahuad para sostener un programa basado en la dolarización.

No cabe duda de que en la conciencia de los actores involucrados en la rebelión del 21 de enero aparece la idea de haber podido «ir más allá». La revocación del mandato de Jamil Mahuad y la conformación de un Gobierno popular, así haya sido por pocas horas, aparecen como los logros más visibles. Sin embargo, ese confuso haber «ido más allá» corre el riesgo de quedarse en una lectura en «clave golpista».

Parece más adecuado recuperar el hecho de que la rebelión del 21 de enero puso sobre el tapete de modo dramático el tipo de democracia y el modelo económico. El conflicto entre legalidad y legitimidad, entre la soberanía popular y los procedimientos democráticos, entre las desgastadas formas de representación político-electoral y las peligrosas expresiones de representación corporativa, son algunos puntos de una intrincada agenda de transformación democrática que interpela a todos los actores.

Desafortunadamente, no es seguro que esta agenda —que se ha dado en llamar «las lecciones del 21»—, sea apropiada por los sectores dominantes. Ya muchos de sus voceros se han atrin-

cherado en la defensa de las dimensiones más instrumentales y menos sustantivas de la democracia, haciendo tabla rasa de la necesidad de democratizar el Estado, ampliar su nivel de representatividad política, construir nuevos nexos de sentido entre Estado y sociedad e incorporar una imprescindible dimensión ética.

Pero también se abren grandes interrogantes para el movimiento social: ¿el levantamiento de enero está inscrito en una visión estratégica de largo plazo del movimiento indígena y social del país, o representó una aventura *putchista*?; ¿faltó simplemente «poder militar»?; ¿cuál es la viabilidad de esta «vía» en el mundo actual? El peligro inmediato es que cada acción colectiva tenga, en la mente de sus gestores, la reedición de los hechos analizados y que, en ese eterno inmediatez, se pierda la perspectiva de transformaciones profundas que suponen el concurso de gran parte de la sociedad.

Las preguntas adquieren urgencia y sentido si se parte de que los resultados de las luchas se plasman en las relaciones de fuerzas resultantes y en los efectos en las políticas públicas. Y, desde esta perspectiva, el balance del 21 de enero no puede ser halagüeño. El contenido del programa del Gobierno de Noboa y la composición de su gabinete dejan el sabor de una «derrota programática» (14).

El punto central de la agenda de Noboa es la aplicación de la Ley de Reactivación y Transformación Económica, aprobada por el Congreso hace unos

(14) Algunos dirigentes sociales han acuñado la fórmula «triunfo político y derrota programática» para referirse a los resultados del 21 de enero.

***Es necesario construir
nuevos nexos de sentido
entre el Estado
y la sociedad ecuatoriana.***

días. La ley contiene varios aspectos: a) abre nuevas oportunidades de privatización de algunas empresas estatales; b) consagra la transferencia del costo de la crisis financiera al Estado a través, entre otros mecanismos, de la reestructuración de los pasivos de los bancos en una cifra que asciende a los tres mil millones de dólares (15); c) pone en vigencia un inédito programa de dolarización, que consiste en la utilización del dólar norteamericano como moneda de uso corriente para los intercambios comerciales y financieros, partiendo de la fijación de un tipo de conversión de 25.000 sucres por un dólar.

En la práctica esto implica la sustitución del sucre como moneda de uso corriente, los ajustes de las tarifas de los servicios públicos a precios internacionales, la eliminación del rol del Banco Central como emisor de moneda nacional, y fundamentalmente la extrema vulnerabilidad del aparato productivo a las fluctuaciones de precios y demandas en el mercado internacional.

(15) Un informe de auditorías internacionales, publicado hace pocos días, pone al descubierto a los mayores deudores de la banca privada. El monto al que asciende la cartera de estos bancos es de tres mil millones de dólares (cifra cercana al Presupuesto General del Estado para este año 2000). En la lista de los 50 mayores deudores constan los «propios ex banqueros, varios diputados, altas autoridades económicas y poderosos empresarios» (*Vistazo* 783, abril de 2000).

Los factores estructurales que hicieron posible el 21 de enero están allí. Aquello no significa que automáticamente se produzcan situaciones similares, sobre todo cuando efectivamente hay un despliegue por parte del Gobierno actual por desactivar algunos puntos explosivos como la amnistía a los insurrectos, el diálogo con los indígenas y la apelación a la unidad de las cámaras tras el plan de dolarización. Otro de los esfuer-

zos centrales es la «sensibilización» de los organismos multilaterales en busca de un acuerdo con fondos frescos. Paradójica y trágicamente el «nuevo papel» de Ecuador en el conflicto regional puede ser una oportunidad para llamar la atención y conseguir auxilio.

La crisis no está resuelta, se ha instalado en la cotidianidad de nuestras vidas y, al parecer, para largo rato.

Bibliografía

- Acosta, Alberto (1997): «Algunos elementos para repensar el futuro de la economía ecuatoriana», *Economía y Política*, época II, 2, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.
- Barrera, Augusto (1999): «Notas sobre la economía política de la reforma neoliberal en América Latina... y la necesidad de una agenda para el futuro», *Economía y política*, época II, 5, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.
- CORDES (Corporación de Estudios para el Desarrollo) (1999): *La ruta de la gobernabilidad*, Informe final del proyecto CORDES-Gobernabilidad, CORDES - AECI, Quito.
- Larrea, Carlos (1997): «Ajuste estructural, distribución del ingreso y empleo en el Ecuador», *Economía y huma-*
- nismo*, año II, 2, Instituto de Investigaciones Económicas PUCE, Quito.
- Lora, Eduardo (1998): «Una década de reformas estructurales en América Latina: Qué se ha reformado y cómo medirlo», *Pensamiento iberoamericano*, Volumen Extraordinario, AECI-BID, Madrid.
- Lucas, Kintto (2000): *La rebelión de los indios*, Abya Yala, Quito.
- Naín, Moisés (1994):, *Instituciones: El eslabón perdido en las reformas económicas de América Latina* (documento mimeografiado), Banco Mundial, Bogotá.
- Quintero, Rafael (2000): *El alzamiento popular del 21 de enero y sus consecuencias para la democracia en Ecuador* (documento mimeografiado). Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Sociología y Ciencias Políticas, Guayaquil.
- Torre, Juan Carlos (1998): *El proceso político de las reformas en América Latina*, Paidós, Buenos Aires.